

Santiago, dieciséis de mayo de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el abogado don Carlos Saavedra Larraín, por los demandantes Ivonne Carvajal Pizarro, Jaime Castillo Meneses y Fabián Morales Manguay, en autos sobre despido carente de causa legal, cobro de prestaciones y nulidad del despido, Rit O-861-2018 del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, recurre de queja en contra de los integrantes de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ministros señores Ricardo Pairicán G. y Miguel Santibáñez A. y la abogado integrante señora María Latife A., por las faltas o abusos graves cometidas en la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, mediante la cual confirmaron la que acogió una excepción de prescripción en la audiencia preparatoria, dando por terminado el procedimiento.

Manifiesta que la decisión objetada fue pronunciada con falta o abuso grave, al haber sido dictada en contravención formal de la ley, una falsa apreciación de los antecedentes del proceso e interpretación errada de la ley, que vulneran gravemente los derechos de sus representados, generan un agravio o perjuicio imposible de resolver y vulneran flagrantemente el procedimiento legal previsto para este tipo de causas.

Refiere que el 27 de noviembre del año 2018 interpuso demanda laboral en contra la empresa Sarey SpA, que tenía domicilio en Coquimbo, y -en forma solidaria- en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), esta última con domicilio en Santiago, ambas fuera del territorio jurisdiccional del Tribunal. Agrega que a la presentación se le dio curso el 4 de diciembre de 2018 y se ordenó la notificación mediante exhorto. Luego de nueve exhortos solicitados, y ante las reiteradas notificaciones fallidas, el liquidador concursal de la demandada principal se notificó expresamente, e interpuso la excepción de prescripción de la acción, en base a que la notificación de la demanda fue efectuada más allá de los seis meses que establece el inciso segundo del art. 510 del Código del Trabajo. En la audiencia preparatoria se confirió el traslado a la excepción, por medio del cual se alegó la aplicación del inciso 1° del art. 510 del Código del ramo y, en subsidio, que el plazo de 6 meses debe entenderse interrumpido en virtud de la interposición de la demanda y no de la notificación de la misma; no obstante, el Tribunal acogió la excepción de prescripción, resolución que fue impugnada en la misma audiencia, la que fue desechada, toda vez que la Corte de Rancagua confirmó la resolución.



Solicita acoger el recurso, se dicte la resolución que invalide o revoque la resolución recurrida y se ordene al Tribunal *a quo*, mediante un juez no inhabilitado, continuar con el conocimiento de los autos y, en su caso, se disponga la respectiva sanción disciplinaria.

Segundo: Que al evacuar el informe de rigor, los recurridos señalaron que la controversia planteada por el quejoso constituye un tema que dice estricta relación con una cuestión de interpretación de ley y, por lo tanto, escapa al sentido del recurso de queja. Señalan que la materia en que incide el recurso se encuentra contenida, en lo sustancial en los artículos 510 del Código del Trabajo y 2503 N° 1, 2518, 2523 y 2524 del Código Civil y, que la interpretación que ha realizado el Tribunal de las normas no puede constituir falta o abuso, aun cuando no coincida con aquella que el recurrente estima la correcta, por lo que solicitan se rechace el recurso de queja.

Tercero: Que el recurso de queja está reglado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, denominado “De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales”, y su párrafo primero, intitulado de “Las facultades disciplinarias”, contiene el artículo 545 que lo consagra como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias definitivas e interlocutorias que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación, que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

Cuarto: Que de estos antecedentes y de los que aparecen en el sistema computacional, correspondientes a la causa antes señalada, se desprenden los siguientes hechos:

a.- Con fecha 27 de noviembre de 2018, los demandantes interpusieron demanda en procedimiento de aplicación general, dirigida en contra de la empresa Sarey SpA y –solidariamente- en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, solicitando se declare que su despido (ocurrido el 31 de octubre de 2018) es carente de causal legal y se condene al pago de indemnizaciones, feriado y remuneraciones adeudadas, además de la nulidad del despido.

b.- El Juzgado del Trabajo de Rancagua, con fecha 4 de diciembre de 2018, dio curso a la demanda, citó a audiencia preparatoria y ordenó notificar personalmente a la demandada principal mediante exhorto dirigido al Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, en tanto al demandado solidario se ordenó



notificar mediante exhorto dirigido a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

c.- La demandada solidaria fue notificada por exhorto, en la ciudad de Santiago el 9 de mayo del año 2019. La demandada principal, en cambio, sólo se tuvo por notificada el 2 de julio de 2020, época en que el liquidador de Sarey SpA (designado el 17 de abril de 2020) presentó un escrito al efecto, luego de múltiples y sucesivos intentos fallidos de notificar la demanda mediante la tramitación judicial (vía interconexión) de exhortos que fueron devueltos con resultado negativo.

d.- La demandada principal, representada por su liquidador, contestó la demanda, reconociendo el vínculo con los actores, pero- acto seguido- opuso excepción de prescripción de todas las acciones intentadas, fundada en que han transcurrido más de seis meses desde la terminación de los servicios, sosteniendo que la interrupción del plazo sólo opera con la notificación de la demanda, evento que ha ocurrido 17 meses después del cese del vínculo laboral.

e.- En la audiencia preparatoria celebrada el 22 de julio de 2020, se confirió traslado de la excepción de prescripción y los demandantes solicitaron el rechazo de la misma en base a que el plazo de prescripción sería de dos años, conforme al inciso primero del artículo 510 del código del trabajo y, en subsidio, para el caso de estimar que el plazo es seis meses, se considere como suficiente requerimiento -para efectos de la interrupción del plazo- la presentación de la demanda y no su notificación, por cuanto hace presente que su inactividad no ha sido la razón de la dilación, sino más bien las maniobras distractivas de la empleadora, a quien solo se logró notificar después de haber sido declarada en liquidación.

f.- Sin perjuicio de lo anterior, el juez del trabajo, en la misma audiencia, acogió la excepción de prescripción interpuesta por la demandada principal, estimando aplicable el inciso segundo del artículo 510 del código del trabajo, en cuanto a que el plazo es de seis meses y *“no siendo aplicable la interrupción alegada por la parte demandante, toda vez, que la expresión requerimiento judicial que utiliza las normas del Código del Trabajo, debe interpretarse en su formalidad, esto es, la notificación válida de la demanda, lo que la diferencia de la caducidad, en la cual expresamente se dispone que para ella basta la interposición de la demanda”* .



g.- La referida resolución fue objeto de recurso de apelación, sin embargo, fue confirmada por la Tercera sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, la que, además, reforzó los argumentos de la misma.

Quinto: Que entonces, conforme se desprende del texto del recurso y de los antecedentes que lo fundan, aparece que se ejerció una acción laboral ordinaria, dentro de los plazos legales para hacerlo, pero -por razones que no fueron imputables a los demandantes-, la notificación legal tardó en demasía, lo que derivó en que se pusiera término al juicio mediante la aplicación de una institución que está concebida para sancionar la inactividad del acreedor en la protección de sus derechos o el reclamo de los mismos.

Sexto: Que, como se observa, los jueces recurridos resolvieron la cuestión relativa a la interrupción de la prescripción, aplicando el criterio dominante en materia civil, tratándose de una prescripción de corto tiempo, y el artículo 2523 del Código Civil, el cual exige para la interrupción de la prescripción que intervenga requerimiento, el cual señalan *“se ha entendido que implica justamente que se ponga en noticia del deudor el cobro que se le está demandando”*.

Séptimo: Que, debe recordarse, que en materia laboral las normas procesales deben ser comprendidas integrando de manera concreta los principios inspiradores que justifican la existencia de dicha disciplina, en especial el principio protector, del cual se desprende la técnica de la interpretación más favorable al trabajador en caso de duda hermenéutica. En tal sentido, el “requerimiento” a que alude el Código Civil en su artículo 2523 N° 2, involucra una acción en movimiento, la petición y, tal como lo ha señalado esta Corte en reiterados fallos (a saber, roles N° 6.900-2015 y 43450- 2017, entre otras) la correcta doctrina sobre la materia dispone que la mera presentación de la demanda interrumpe la prescripción, siendo la notificación de la misma una condición para alegarla, debiendo circunscribirse su efecto al ámbito procesal, pero no como un elemento constitutivo de la interrupción de la prescripción, máxime si dicha actuación no depende de la pura voluntad del acreedor, desde que *“queda supeditada su realización a los vaivenes del acto procesal del receptor y la no siempre fácil ubicación del deudor”*.

A esto cabe agregar que el fundamento de la prescripción estriba en sancionar la desidia o negligencia del demandante en la protección de sus derechos o en el reclamo de los mismos. De esta manera, no cabe sino considerar que la presentación de la demanda satisface este requisito, dado que ahí aflora la



voluntad de hacer efectivo un derecho mediante la acción respectiva, sin que, para ese menester, haya necesidad de notificarla.

Octavo: Que, de este modo, la actuación de los ministros y la abogada integrante recurridos, impresiona como limitativa a la posibilidad de obtención de un pronunciamiento judicial que adjudique un derecho dubitado y despojada de la razonabilidad y justificación que precisaría para ser aceptada como admisible a la luz de lo dispuesto en el N° 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental, máxime en un contexto de excepcional sensibilidad e importancia, como el del derecho del trabajo, que se vincula con la esencia misma del ejercicio de la jurisdicción, en cuanto función tutelar de los derechos consagrados en nuestro ordenamiento, que por la especial sensibilidad que su rol protector impone, debe en lo posible evitar salidas incidentales que no permitan un pronunciamiento de mérito, como en la especie sucede, incurriéndose, de este modo, en falta o abuso grave que debe ser reparado por vía del presente arbitrio.

Por estas consideraciones y conforme lo dispone el artículo 549 del Código Orgánico de Tribunales, **se acoge** el recurso de queja deducido en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, señor Ricardo Pairicán y señor Miguel Santibáñez y la abogada integrante señora Maria Latife, por haber dictado la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte y, en consecuencia, se la deja sin efecto y se decide, conforme lo razonado en este fallo, que **se revoca** la sentencia interlocutoria de veintisiete de julio de dos mil veinte, dictada en los autos RIT O-861- 2018, del Tribunal del Trabajo de Rancagua, y, **en su lugar**, se declara que la acción de los actores no se encuentra prescrita y deberá dársele la tramitación pertinente, citándose a las partes- mediante juez no inhabilitado- para continuar la audiencia preparatoria, *de conformidad al procedimiento establecido por la ley.*

No se ordena pasar estos antecedentes al Tribunal Pleno, por estimarse que no existe mérito suficiente para ello.

Acordada con el **voto en contra** del abogado integrante señor Humeres, quien estuvo por rechazar el presente recurso, considerando que del mérito de autos y de los antecedentes tenidos a la vista, se advierte que los recurridos obraron en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales y han resuelto confirmar la resolución en lo que – a su juicio- representa la interpretación jurídica correcta sobre la materia y que no constituye falta o abuso grave que amerite acoger un recurso como el de la especie y que, por lo tanto, sólo cabe desestimar.



Regístrese y archívese.

N°122.186-2020

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Andrea Muñoz S., señor Diego Simpertigue L., y los abogados integrantes señor Héctor Humeres N., y señora Leonor Etcheberry C. No firman los Abogados Integrantes señor Humeres y señora Etcheberry, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ambos ausentes. Santiago, dieciséis de mayo de dos mil veintidós.



BXBNZKWXWX

En Santiago, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

